

TEMA 11.- LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO: DISPOSICIONES GENERALES; DE LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La Ley 40/15, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), tiene por objeto el establecimiento y la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades (**art.1**).

Aquí se abordará únicamente el estudio de los principios de actuación y funcionamiento del sector público y de los órganos administrativos, temas todos ellos recogidos en el **Título Preliminar** de la Ley, concretamente en sus **Capítulos I (arts. 1 a 4) y II (arts. 5 a 24)**.

DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO.

Con carácter previo al establecimiento, en sus **Disposiciones Generales (Capítulo I)**, de los **principios de actuación y funcionamiento** del sector público español, la ley determina (**art.2**) su ámbito subjetivo delimitando lo que debemos entender por **sector público**:

1. La Administración General del Estado.
2. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. Las entidades que integran la Administración Local.
4. El sector público institucional, integrado, a su vez, por:
 - a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas
 - b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas
 - c) Las Universidades Públicas

Todos, con excepción de las letras b) y c) del apartado 4, tienen la consideración de Administraciones Públicas para la Ley 40/15.

Principios de actuación de las Administraciones Públicas.

Entre los **principios generales (art.3)** que deberán respetar todas las Administraciones Públicas en su actuación y en sus relaciones recíprocas, además de encontrarse los ya mencionados en el **artículo 103 de la Constitución Española de 1978** de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, se detalla en la ley un amplio catálogo de principios:

- a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
- b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
- d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
- e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
- f) Responsabilidad por la gestión pública.
- g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
- h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

Destaca la incorporación de los **principios de transparencia y de planificación y dirección por objetivos** como exponentes de los nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades administrativas.

Además, se establece la obligación de que **las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos**, previsión que se desarrolla posteriormente en el Título III referente a la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.

Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad.

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el **principio de proporcionalidad (art.4)**. Ello implica elegir la medida menos restrictiva, indicando el motivo por el que es necesaria para la protección del interés público y justificando su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.

Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

DE LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Título Preliminar regula pormenorizadamente en su **Capítulo II (“De los órganos de las Administraciones Públicas”)** el régimen de los órganos administrativos, tomando como base la normativa contenida en la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e incorporando ciertas novedades. La creación de órganos solo podrá hacerse previa comprobación de que no exista ninguna duplicidad con los existentes. Se completan las previsiones sobre los órganos de la Administración consultiva y se mejora la regulación de los órganos colegiados, en particular, los de la Administración General del Estado, destacando la generalización del uso de medios electrónicos para que éstos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos o elaborar y remitir las actas de sus reuniones.

Siguiendo la estructura del propio Capítulo II, dividiremos este epígrafe en los siguientes apartados:

- 1.- Los órganos administrativos
- 2.- Competencia de los órganos administrativos
- 3.- Órganos colegiados
- 4.- Abstención y recusación

1.- LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (SECCIÓN 1ª. ARTS. 5 A 7)

Son **órganos administrativos** las unidades administrativas a las que se les atribuyen funciones que tengan **efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo**. Corresponderá a cada Administración Pública delimitar las unidades administrativas que compondrán sus propios órganos administrativos.

Para la creación de un órgano administrativo deben cumplirse tres requisitos:

- a) Determinación de su **forma de integración** en la Administración Pública de que se trate y su **dependencia jerárquica**.
- b) Delimitación de sus **funciones y competencias**.
- c) Dotación de los **créditos** necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

No podrán crearse nuevos órganos administrativos que supongan duplicación de los ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. En este sentido, para la creación de un nuevo órgano administrativo habrá de **comprobarse con carácter previo la no existencia de otro** que desarrolle iguales funciones sobre el mismo territorio y población en la misma Administración Pública.

Los órganos administrativos dirigen las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes a través de **instrucciones y órdenes de servicio**. Aunque su incumplimiento no afecta, por sí solo, a la validez de los actos dictados por los órganos, sí podrá depurarse la responsabilidad disciplinar en que se pudiera incurrir.

Por último, con respecto a la **Administración consultiva**, encargada del consejo y asesoramiento de la Administración activa, podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa o bien a través de los servicios de asistencia jurídica de la propia Administración activa.

2.-COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (SECCIÓN 2ª. ARTS. 8 A 14)

La competencia es **irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tienen atribuida como propia**, salvo los casos de delegación o avocación de competencias que veremos a continuación. Con todo, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas (principio de desconcentración) en otros órganos jerárquicamente dependientes.

Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración sin especificar el concreto órgano que deba ejercerla, deberá entenderse que la competencia para instruir y resolver los expedientes corresponde a:

1º.- Los órganos inferiores competentes por razón de la materia y territorio.

2º.- Si existe más de un órgano inferior que pudiera resultar competente, la competencia corresponde al órgano superior jerárquico común.

La delegación de competencias (art.9)

Los órganos administrativos pueden **delegar el ejercicio (no la titularidad)** de sus competencias en otros órganos de la misma Administración, sean o no jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes.

En ningún caso podrá ser objeto de delegación las competencias relativas a:

- a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
- b) La adopción de disposiciones de carácter general.
- c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
- d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

En el ámbito de la **Administración General del Estado** (Organización Central, Organización Territorial y Administración General del Estado en el exterior) la delegación de competencias deberá ser **aprobada previamente**:

- Por el órgano ministerial de quien dependa el **órgano delegante** y, en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el **órgano máximo de dirección**.
- Cuando se trate de **órganos no relacionados jerárquicamente**:
 - Si órgano delegante y delegado pertenecen al mismo ministerio: por el **superior común**.
 - Si órgano delegante y delegado no pertenecen al mismo ministerio: por el **órgano superior de quien dependa el órgano delegado**.

Además, los **órganos de la Administración General del Estado** podrán **delegar** el ejercicio de sus competencias propias en **sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes**, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. En este caso, la delegación de competencias deberá ser **aprobada previamente** por los **órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último** cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente.

Por último, se recogen unas notas comunes a la delegación de competencias que podemos sintetizar de la siguiente forma:

- Las delegaciones de competencias y sus revocaciones deben **publicarse** en el “Boletín Oficial del Estado”, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, dependiendo a qué Administración pertenezca el órgano delegante y su ámbito territorial de competencia.
- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación de competencias **indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante**.
- **No podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación**, salvo que una ley expresamente lo autorice.
- La delegación será **revocable en cualquier momento** por el órgano delegante.

La avocación de competencias (art.10)

De forma general, la avocación consiste en que un órgano atraiga hacia sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior. En este sentido, y atendiendo a la configuración que de la avocación hace la LRJSP, **los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes**. El requisito que se exige es la existencia de circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que hagan conveniente la avocación.

¿Cómo se realiza la avocación? Mediante un **acuerdo motivado** que debe ser **notificado** a los interesados, si los hubiera, en el concreto procedimiento en donde se produzca la avocación, **con anterioridad o de forma simultánea a la resolución final** que se dicte. Contra dicho acuerdo **no cabe recurso**, sin perjuicio de su impugnación en el recurso que se pueda interponer contra la resolución del concreto procedimiento administrativo.

Encomiendas de gestión (art.11)

Consiste en encomendar a **otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración**, la realización de **actividades de carácter material o técnico siempre que entre sus competencias estén estas actividades**.

¿Cuándo proceden las encomiendas de gestión? Cuando se dan **razones de eficacia** o cuando **no se posean los medios técnicos** idóneos para el desempeño de las actividades encomendadas.

Como límite a las encomiendas de gestión, señala la LRJSP que no podrán tener por objeto prestaciones propias de contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

Las encomiendas de gestión no suponen cesión de la **titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio**, por lo que corresponde a los órganos o entidades encomendantes dictar todos los actos y resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda.

¿Cómo se formalizan las encomiendas de gestión? Distinguiremos si las encomiendas de realizan entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración o no:

1. Encomiendas de gestión entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración.

En primer lugar, habrá que atender a lo que establece la **normativa propia** de esa Administración. **En su defecto**, la formalización se realizará por **acuerdo expreso** de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes.

En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberán ser **publicados**, para que produzcan efectos, en el “Boletín Oficial del Estado”, Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano encomendante.

2. Encomiendas de gestión entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a diferentes Administraciones.

Se formalizan mediante la firma de un **convenio** entre ellas, que deberá ser publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano encomendante, **salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o, en su caso, Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local**.

Delegación de firma (art.12)

Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos **en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan**. Esta delegación de firma es posible con independencia de que la competencia la tengan por atribución o por delegación. Como límite, el artículo 12 se remite al artículo 9, es decir, a los límites estudiados en la delegación de competencias.

La delegación de firma **no altera la competencia del órgano delegante y para su validez no es necesaria su publicación**. Ahora bien, en las resoluciones y actos que se firmen por delegación, habrá de hacerse constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

Suplencia (art.13)

Los titulares de los órganos administrativos pueden ser **suplidos temporalmente** en los siguientes supuestos:

- a) Vacante
- b) Ausencia
- c) Enfermedad
- d) Abstención
- e) Recusación

La suplencia **no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación**. Ahora bien, en las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien está ejerciendo esta suplencia.

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejerce por quien designe el órgano administrativo inmediatamente superior de quien dependa.

¿Cómo se designa al suplente en el ámbito de la Administración General del Estado?

- a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes.
- b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la **suplencia**.

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia NO SUPONEN ALTERACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA, AUNQUE SÍ DE LOS ELEMENTOS DETERMINANTES DE SU EJERCICIO QUE EN CADA CASO SE PREVÉN (Art. 8.1)

Decisiones sobre competencia (art.14)

Termina la Sección 2ª del Capítulo Segundo del Título Preliminar delineando brevemente el procedimiento para la resolución de posibles conflictos de atribuciones de competencias, debiendo acudirse a la Disposición Adicional undécima para completar dicha regulación.

Los conflictos de atribuciones solo pueden suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que **no haya finalizado el procedimiento administrativo**.

El artículo 14 se limita a señalar que el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. Es la misma solución que emplea el **artículo 116 de la Ley 39/15, del Procedimiento Administrativo Común**, cuando contempla como causa de inadmisión de los recursos la incompetencia del órgano administrativo.

Además, se otorga a los interesados en un procedimiento la facultad de, o bien, dirigirse al órgano que estuviera conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente, o bien, dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.

3.- ÓRGANOS COLEGIADOS

La **Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar (arts. 15 a 22)** aborda el estudio de los órganos colegiados de las **distintas Administraciones Públicas** especialmente la de los **órganos colegiados de la Administración General del Estado**, destacando el uso de medios electrónicos para que éstos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos o elaborar y remitir las actas de sus reuniones.

Con carácter general, el régimen jurídico de los **órganos colegiados (Subsección 1ª) de las distintas Administraciones Públicas** se ajusta a las normas contenidas en la LRJSP, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. Son continuas en esta Sección las referencias a dos tipos concretos de órganos colegiados:

- **Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales.**
- **Los órganos colegiados compuestos por representantes de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales.**

Para facilitar el estudio de todos los órganos colegiados, abordaremos primeramente el régimen jurídico de los órganos colegiados con carácter general para después analizar las peculiaridades de esos órganos colegiados concretos a quienes la LRJSP permite establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los **acuerdos de creación** así como las **normas de funcionamiento** de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser **publicados** en el Boletín o Diario Oficial de la Administración pública en que se integren. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.

Los órganos colegiados tendrán un **secretario (art.16)** que podrá ser uno de los miembros del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente, a quien le corresponde velar por la legalidad de las actuaciones del órgano colegiado, certificar sus actuaciones y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados.

Todos los órganos colegiados podrán **constituirse, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas** tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresamente lo contrario.

Para la válida **constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos**, se requerirá la asistencia presencial o a distancia del Presidente y Secretario (o, en su caso, de quienes les suplan) y de, al menos, la mitad de sus miembros. Además, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros, podrán constituirse válidamente para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa si así lo deciden todos sus miembros.

Si en las normas de funcionamiento del órgano colegiado no se prevé el **régimen de convocatorias**, este puede ser establecido por el propio órgano, pudiendo establecerse una segunda convocatoria especificando, en este caso, el número de miembros necesarios para constituir el órgano.

Salvo que no fuera posible, las **convocatorias serán remitidas** a través de medios electrónicos, con el orden del día y la documentación necesaria para su deliberación, cuando sea posible, así como las condiciones en las que se celebrará la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en los que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

No puede ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría.

Los **acuerdos** serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada su presidencia. Cuando los miembros voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de responsabilidad.

De cada sesión que se celebre, el Secretario levantará un **acta (art.18)** en donde se especificarán los asistentes, el orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. El acta podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediatamente siguiente.

Por su parte, los **órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella (Subsección 2ª)** se registrarán por lo dispuesto en el **artículo 19** de la LRJSP así como por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley 39/15, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Entre las **atribuciones de su Presidente** (representación, acordar la convocatoria de sesiones, fijación del orden del día, presidencia de las sesiones, etc) destaca su voto dirimente en caso de empate y el régimen previsto para su eventual sustitución, disponiendo que corresponde al Vicepresidente y, en su defecto, al miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

Además, se especifica que los miembros del órgano colegiado deberán:

- a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
- b) Participar en los debates de las sesiones.
- c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.
- d) Formular ruegos y preguntas.
- e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
- f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Los **miembros titulares de los órganos colegiados son sustituidos** por sus suplentes, si los hubiera.

La designación, cese y sustitución temporal del **Secretario** en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del propio órgano.

Corresponde al Secretario:

- a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
- b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.
- c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
- d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
- e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
- f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

A solicitud de los respectivos miembros del órgano, en **el acta** constará el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido favorable de su voto.

Los miembros que discrepen del voto de la mayoría podrán formular **voto particular** por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.

Las **actas se aprobarán** en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante el Secretario emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y constancia. En las certificaciones de acuerdos adoptados con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente esta circunstancia.

Dispone el **artículo 20.1** que **son órganos colegiados** aquellos que se crean formalmente y están integrados por tres o más personas, a los que se atribuye funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúan integrados en la **Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos**.

Con respecto a su **constitución**, tiene como requisito indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se crea, de los siguientes extremos:

- a) Sus fines u objetivos.
- b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
- c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes miembros.
- d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya.
- e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

El **régimen jurídico** de estos órganos colegiados se ajustará a lo previsto en el artículo 19.1 para los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la propia LRJSP o en su norma o convenio de creación.

Por último, los **artículos 21 y 22** de la LRJSP recogen la **clasificación y composición de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos, así como su creación, modificación y supresión**.

Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:

- a) Órganos colegiados **interministeriales**, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios.
- b) Órganos colegiados **ministeriales**, si sus componentes proceden de los órganos de un solo Ministerio.

La **creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos** sólo requerirá de norma específica, con publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:

- a) Competencias decisorias.
- b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos.
- c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado.

En estos casos, la norma de creación deberá revestir la forma de **Real Decreto** en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; **Orden ministerial conjunta** para los restantes órganos colegiados interministeriales, y **Orden ministerial** para los de este carácter.

En los demás supuestos, los órganos colegiados tendrán el carácter de **grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados**. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.

La **modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos** se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto.

PARTICULARIDADES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN QUE PARTICIPEN ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE INTERESES SOCIALES Y DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS COMPUESTOS POR REPRESENTANTES DE DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CUENTEN O NO CON PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE INTERESES SOCIALES.

- Quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda pero **sin participar en la estructura jerárquica** de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.
- ~~Los acuerdos de creación así como las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados por la Administración a la que corresponda la Presidencia.~~
- A efectos de **celebración de sesiones**, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales a los que se haya atribuido la condición de portavoces.

- El **voto del Presidente** solo es dirimente si se establece en sus propias normas.
- El **régimen de sustitución del Presidente** debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.
- Las organizaciones representativas de intereses sociales **podrán sustituir a sus miembros titulares por otros**, acreditándolo ante la Secretaría, con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan las normas de organización.

4.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

En la **Sección 4ª (arts. 23 y 24)**, se regulan las circunstancias en las que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones debe abstenerse de intervenir en el procedimiento administrativo, así como los supuestos en los que puede promoverse por los interesados su recusación.

En este sentido, las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato para que resuelva lo que proceda, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
- d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- e) Tener relación de servicio con personal natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Cuando concurra alguno de los anteriores supuestos, **podrá promoverse recusación** por escrito por parte los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento administrativo. En el escrito de recusación se expresará la causa o causas en las que se funda. En el día siguiente, el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa de recusación alegada. Si es así, y el superior aprecia dicha causa, acordará su sustitución. Si, por el contrario, se niega la causa de recusación alegada por el interesado, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que estime oportunos.

Contra las resoluciones en materia de recusación **no cabe ningún recurso**, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que pone fin al procedimiento administrativo.

Dispone el **artículo 74 de la Ley 39/15, del Procedimiento Administrativo Común** que si se suscita en el procedimiento una recusación se suspenderá la tramitación del mismo.